

LA ÉPOCA DE VARGAS: 1930/1945

Por **Mónica Hirst***

Este trabajo tiene como objeto realizar un breve análisis de la actuación política de Getúlio Vargas durante su primer periodo de gobierno. Se trata de un estudio sucinto que intenta sistematizar los hechos principales y señalar los momentos más relevantes de lo que se acordó en llamar la "era Vargas". Pretendemos poner el acento en las variables que definirán las transformaciones políticas, económicas y sociales durante los quince años en que Vargas permaneció en el poder, destacando la especificidad de la acción de su gobierno.

Consideramos importante subrayar el carácter limitado de este estudio frente a la dimensión que adquirió la trayectoria política de Vargas en la historia contemporánea brasilera. Solo nos proponemos examinar el periodo 1930/1945, en el cual Vargas ejerció el poder en forma continua, manteniéndose en un régimen cerrado y autoritario.

No analizaremos aquí su actuación posterior a 1945, cuando se altera profundamente el rumbo de su carrera política. El segundo gobierno de Vargas, de 1951 a 1954, se inserta en un contexto político bastante diferente al anterior. Vargas es entonces electo democráticamente, contando con un fuerte apoyo popular, y conduce su gobierno dentro de los parámetros constitucionales. En 1954, presintiendo que una vez más el golpe lo alejaría del poder, se suicida dejando al pueblo una carta testamento, su último gesto político.

LOS ANTECEDENTES

La trayectoria política de Getúlio Vargas se inicia durante el periodo de la República Vieja, en los marcos regionales que definen el juego del poder del Brasil en esa época. La primera República (1889-1930) se definía, políticamente, por un sistema que fortalecía la estructura de poder regional-oligárquico, donde los estados económicamente más fuertes y demográficamente más expresivos garantizaban para sí el control político y económico del país. De hecho, se trataba de un modelo estratificado, en el cual San Pablo y Minas Gerais, por ser regiones de producción cafetera -polo dinámico de la economía nacional- se aseguraban una posición hegemónica sobre los demás estados.

La actuación de Vargas en Río Grande do Sul, su estado de origen se desarrolla en el contexto específico de la política local, que desde el inicio de la República venían presentando rasgos bastante diferenciados con relación a los otros estados brasileños. Río Grande do Sul tenía, en el juego político nacional, perjudicada su participación por la intensidad de los conflictos políticos locales, que se traducían básicamente el antagonismo entre el Partido Republicano y el Partido Federalista.

La vida política de Río Grande era dirigida por el Partido Republicano. Auxiliado por determinaciones específicas de la constitución estadual, que permitía la legislación por decreto y la continua reelección del gobernante del estado, este partido se venía manteniendo en el poder; primero, con Julio de Castilho y después, con Borges de Medeiros. Este último controlaba el estado desde 1906, a través de sucesivas reelecciones, apoyado en una estructura local centralizada, legitimada en la propia constitución estadual, de fuerte influencia positivista.

Los principios básicos autocráticos que definían la vida política de Río Grande do Sul se expresaba a través del castillismo, que tenía en el Partido Republicano el vehículo de sus ideales. Como miembro de este partido, Vargas dio los primeros pasos de su carrera política y fue elegido tres veces diputado estadual, entre 1909 y 1921. Participo, en el ejercicio de su tercer mandato, en la Comisión de Presupuesto y se destacó como líder en la mayoría. A partir de 1923, Vargas vio ampliada su actuación política: paso a ocupar una banca en la Cámara Federal, en la cual asumió el liderazgo de la bancada *gaucha*, y en 1926 fue invitado a ocupar la cartera de hacienda en el gobierno de Washington Luis.

En Río Grande do Sul, la oposición federalista a la dominación del Partido Republicano agudizaba el tradicional conflicto, que las fuerzas riograndeses intentaron solucionar en 1923 con el Pacto de Piedras Altas. Se firmó entonces un acuerdo que implicaba una reforma constitucional más favorable al relevo de las fuerzas políticas en la dirección del estado. En la práctica, la aproximación entre las fuerzas federalistas y republicanas se expresó en la disputa estadual de 1928, cuando Vargas fue elegido presidente de Río Grande do Sul, dando principio a un proceso de conciliación que luego permitió la formación de un Frente Unido Gacho. El nuevo jefe estadual, a través de los arreglos políticos utilizados en la composición de su ministerio y con la creación de un acceso más sistemático al círculo de poder para los diferentes grupos que componían la élite política riograndense, restringía la expresión de antiguas divergencias y se fortalecía su representatividad.

* La autora es investigadora del Centro de Investigación y Documentación de Historia Contemporánea de la Fundação Getúlio Vargas, Río de Janeiro.

CRISIS Y REVOLUCIÓN

A partir de la década del 20, el sistema político de la Vieja Republica comenzó a enfrentar una serie de crisis que desestabilizaron progresivamente el pacto oligárquico sobre el cual se sustentaba. Las revueltas lideradas por una juventud radical -los movimientos *tenentistas*-, la creciente insatisfacción de las clases medias urbanas frente al carácter excluyente del juego político oligárquico, los conflictos entre las oligarquías estaduais y las escisiones en el interior de las mismas, provocadas por disputas electorales, contribuían a una creciente vulnerabilidad del orden político vigente. También se agudizaba la grave situación internacional que venía afectando directamente las exportaciones del café brasileiro. Todos estos hechos pasaron a determinar los contornos de un proceso de redefinición de la vida política brasileira. Se rompía el pacto oligárquico entre San Pablo y Minas Gerais, y Río Grande do Sul ascendía al círculo de los principales participantes de las articulaciones políticas nacionales. Se intensificaban, por otro lado, las disidencias oligárquicas locales, profundizando incompatibilidades políticas. En este contexto que se funda, en San Pablo, el Partido Democrático.

En 1929, en la medida en que se achicaba el camino de las negociaciones para la elección del candidato presidencial, se establecía un nuevo parámetro de alianzas entre los estados, explícito en la constitución de la Alianza liberal.

En torno a la candidatura de Vargas se unieron los estados de Minas Gerais, Río Grande do Sul y Paraíba, en oposición al candidato paulista Julio Prestes. La Alianza Liberal intentaba, al buscar el apoyo de las clases medias descontentas, de los tenientes revoltosos y de las oposiciones estaduais, incorporar en su plataforma una propuesta para ampliar la participación política sin traspasar, sin embargo, los límites concretos del orden liberal, de base agrario-exportadora, que definían la vida económica y política del país. El programa de la Alianza defendía la implantación de una nueva legislación electoral, la reorganización de la justicia y la educación, la elaboración de una legislación social, el incentivo al desarrollo económico y la adopción de medidas proteccionistas del cultivo cafetero. Las elecciones se registraron el 1º de marzo de 1930 y sus resultados indicaron la victoria del candidato paulista, como muchos opositores ya preveían. Además de la derrota de Vargas, a diversos candidatos aliancistas a la Cámara no se le reconocieron sus mandatos.

Entre tanto ya se registraban una serie de vinculaciones entre miembros de la oposición, con el objeto de preparar una salida revolucionaria que tendría como brazo militar al *tenentista*. Entre los principales articuladores estaban Osvaldo Aranha, Joao Neves de Fontoura, Flores da Cunha y Lindolfo Collor; entre los tenientes se destacaban Siquiera Campos, Juárez Távoda y Joao Alberto.

En el mes de julio, el asesinato de Joao Pessoa, gobernador del estado de Paraíba y ex-candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Vargas, provocó manifestaciones de protesta en varios puntos del país. Frente a la intervención federal en Paraíba, se desencadenó el proceso revolucionario que en los momentos finales de su preparación contó con el liderazgo personal de Vargas. El movimiento se inició el 3 de octubre en Río Grande do Sul, y ya el día 24 de ese mes se constituía la Junta Gubernamental que depuso al presidente Washington Luis y el 3 de noviembre impuso a Getulio Vargas como jefe de estado.

GOBIERNO PROVISIONAL

La actuación de Vargas durante el Gobierno Provisional se caracterizó por el esfuerzo permanente para conciliar, a nivel regional y nacional, conflictos y disputas políticas provocadas por antagonismos declarados entre las oligarquías estaduais y los grupos *tenentistas*. A estos últimos les interesaba el control de los estados, ya sea asumiendo sus gobiernos o ejerciendo influencia directa con la elección de los interventores. La sustitución inmediata de los presidentes estaduais tenían como objetivo someter a las oligarquías regionales al poder central del Gobierno Provisional.

La preocupación por crear un espacio político institucional para los revolucionarios también se manifestó en la composición del gabinete, inclusive en la creación de dos nuevas carteras (Trabajo y Educación), cuando Vargas procuró respetar las aspiraciones de los diferentes grupos que habían participado en el movimiento del 30. En este sentido, la participación de Río Grande do Sul se contempla con tres de los siete ministerios civiles Justicia, Agricultura y Trabajo-, la de Minas Gerais con dos- Exterior y Educación-, la de Paraíba con Transporte y Obras Públicas y la de San Pablo con Hacienda.

Durante los primeros años del Gobierno Provisional, el grupo *tenentista* procuró consolidar su presencia política en los ámbitos regional y nacional, a través de la creación de legiones y clubes que funcionaban como grupos de presión y defensa de los ideales por los cuales los tenientes habían tomado parte de la revolución. La intransigencia en cuanto a la presencia todavía viva de la estructura de poder oligárquico en la política brasileira llevaba a este grupo a dar prioridad a un amplio programa de reformas, a ser implantadas por el gobierno "revolucionario", y a postergar, consecuentemente, el proceso de constitucionalización.

El *tenentismo*, al revelarse inviable como movimiento político autónomo, perdía su fuerza en la medida en que su precaria articulación interna lo tornaba vulnerable a las presiones de las oligarquías estaduais y al propio Ejército, que temía el debilitamiento de la jerarquía militar. Aún así, el movimiento consiguió que Vargas efectuase, durante el Gobierno Provisional, una serie de medidas políticas influidas por sus demandas.

En este período, Vargas enfrentó crisis regionales que se agravaron con las presiones de los sectores oligárquicos disidentes de San Pablo, Minas Gerais y Río Grande do Sul, que habían participado en la Revolución del 30. Estas oligarquías insistían en la necesidad impostergable de la constitucionalización del país, que percibían como un encauzamiento prioritario para recuperar la fuerza de sus instrumentos políticos partidarios. Esta posición se expresa en forma contundente con el movimiento constitucionalista de San Pablo (1932).

LA REVOLUCIÓN DE 1932

Con el alejamiento de la élite política paulista del proceso de toma de decisiones a nivel estadual y nacional se minó completamente la posibilidad de una convivencia armoniosa con el gobierno federal. La dificultad de relación entre los tenientes y la élite política paulista se extendía también a las fracciones disidentes de la oligarquía de ese estado, que anteriormente habían participado en la campaña de la Alianza Liberal prodefensa de la candidatura de Vargas. La situación en San Pablo se volvía aun más compleja en la medida que, además de la confrontación entre los tenientes y las fuerzas políticas locales, surgía una disputa por el poder estadual en el seno del propio movimiento *tenentista*. Este se dividía entre una estrategia de aproximación a las oligarquías y una propuesta de búsqueda de una nueva base social de apoyo político entre los trabajadores urbanos.

A partir de 1931 la crisis paulista implicó la sustitución, en tres ocasiones, del interventor del estado y la confrontación constante entre los tenientes, el Partido Demócrata y el Gobierno Federal. La inestabilidad política generada por este proceso tuvo su desenlace en julio de 1932, cuando San Pablo eligió la opción revolucionaria. En realidad, el desencadenamiento de una guerra civil representaba un esfuerzo extremo de resistencia a las nuevas reglas centralizadoras impuestas por el Gobierno Provisional, por parte del estado política y económicamente más fuerte de la federación.

La derrota de la Revolución Constitucionalista, después de cuatro meses de conflicto armado, no pidió que se impusiese como victorioso el camino de la constitucionalización de la vida política brasileira. La victoria política de esta revolución, militarmente derrotada, aseguraba la continuidad de la alternativa constitucional ya iniciada en el comienzo de 1932 con la promulgación del nuevo código electoral y con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para abril de 1933.

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Los trabajos de la Asamblea Constituyente de 1934 se dieron en un momento en que Vargas se encontraba enteramente comprometido con el proyecto de apertura política. Los rumbos que había tomado la nación ubicaban en el orden del día la reconstitucionalización del país. Mientras tanto, el nuevo cuadro político no llegó a impedir los movimientos de Vargas en el sentido de garantizar para sí la dirección de este proceso. El futuro presidente procuraba, adaptándose rápidamente a la coyuntura, crear raíces en el sistema representativo y, concomitantemente, jugaba con la dimensión nacional y regional de la actividad política. Apoyaba los esfuerzos de los tenientes para formar un partido nacional, al mismo tiempo que estimulaba a los interventores de los estados para que crearan organizaciones partidarias regionales.

En el período comprendido entre las elecciones de los constituyentes y el inicio de los trabajos de la Asamblea, es decir, entre mayo y noviembre de 1933, ministros e interventores trabajaron en la defensa de la candidatura de Vargas, desarticulando conspiraciones y minando el lanzamiento de otros candidatos. En julio de 1934 fue instalado el gobierno constitucional, con la elección del Presidente de la República y la aprobación de la nueva Constitución.

La permanencia de Vargas en el poder tenía como contraparte una constitución que atendía principalmente los intereses de las oligarquías del centro-sur del país. El principio federativo y las restricciones del poder ejecutivo de la nueva Constitución eclipsaban las propuestas *tenentistas* de orientación centralizadora y autoritaria, que perdían, de esta forma, el espacio formal-legal de su programación.

Los puntos votados que mejor ejemplifican esta derrota son: la elección directa del Presidente de la República, Asamblea Nacional sin una Cámara de Representantes y mantenimiento de las principales fuentes tributarias de los estados. En términos generales la carta de 1934 atribuía al poder legislativo una responsabilidad predominante y garantizaba a las oligarquías plenas condiciones para la defensa de sus intereses.

Una vez aprobada la nueva constitución y electo el Presidente de la República, la Asamblea Constituyente fue transformada en Asamblea Ordinaria, inaugurándose en Brasil un ordenamiento político con bases representativas que el país jamás había experimentado. Si por un lado se redefinía la vida institucional brasileira,

por otro se iniciaba un progresivo desajuste entre la insatisfacción cotidiana de las clases medias urbanas y los canales políticos que se ofrecían para que tal insatisfacción pudiese ser expresada.

ACCIÓN INTEGRALISTA BRASILEIRA Y ALIANZA NACIONAL LIBERTADORA

Entre 1934 y 1937 se fundaron, aproximadamente, 200 partidos estaduais, todos ellos incapaces de elaborar un proyecto nacional que atendiese a las dificultades sociales y económicas que el país enfrentaba. Las alternativas políticas que surgen en el ámbito nacional implican una toma de posición radical frente a estos problemas.

La derecha organizó la Acción Integralista Brasileira (AIB), que desde su creación, en 1932, intentaba agrupar los diversos movimientos de tendencias fascistas y ultraconservadoras que imponían las nuevas líneas de pensamiento autoritario venidas de Europa.

Apuntando a la formación de una nueva sociedad, la AIB se caracterizaba, doctrinariamente, por el tradicionalismo, el apego a la moral cristiana y la crítica a los valores liberales, y representaba el primer esfuerzo de organización política de masa en el panorama nacional. La AIB, concebida de manera rígida, ampliaba progresivamente su influencia sobre la base de una compleja infraestructura de doctrina ideológica. Su estructura interna reflejaba la propuesta integralista de organización del Estado y comprendía una red de órganos burocráticos con funciones y atribuciones específicas. A pesar de haber sufrido algunas reestructuraciones la organización reunía: el Consejo Superior, la Cámara de los 40 y la Cámara de los 400. Además existían las Secretarías de Servicios Electorales, Doctrina y Estudios, Educación, Propaganda, Femenina y de la Juventud, Cultura Artística, Asistencia Social, Prensa y Relaciones Exteriores.

El éxito de la AIB fue avalado por quinientos mil habitantes que la organización consiguió movilizar, principalmente el Río Grande do Sul, San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Ceará. En 1935, la Acción Integralista adhirió formalmente a la política institucional, lanzando a su jefe, Plinio Salgado, como candidato a la presidencia de la República, cargo que disputaría con el propio Vargas.

La izquierda creó un frente antifascista, influida por el intento de formación de frentes amplios, que venía siendo defendido por los partidos comunistas europeos. Además de las diversas corrientes de la izquierda que lo componían, la Alianza Nacional Libertadora (ANL) reunía católicos y demócratas y buscaba movilizar sectores de la clase media, proletarios, intelectuales, profesionales liberales y militares para combatir los movimientos de derecha en el Brasil.

La ANL, organizada en marzo de 1935, procuró actuar a través de un intenso trabajo político desarrollado en las calles, en el Congreso (donde se había constituido un Frente Parlamentario), en los sindicatos y en los cuarteles. Esta organización, según sus dirigentes, llegó a conseguir la adhesión de cuatrocientas mil personas. Robert Levine en su libro *The Vargas Regime* afirma, en cambio, que el número de militantes de la ANL no superaba los cien mil.

La libre expresión y organización política y la creciente tensión social -provocada por las huelgas y un activo movimiento obrero- estimulaba una progresiva aprehensión del Estado en cuanto a su capacidad de control y represión. La inexistencia de instrumentos legales que pudiesen ser utilizados como salvaguardas de la nueva constitución justifica la defensa de la ampliación de sus prerrogativas para mantener el orden interno. En este sentido, se efectuó la presentación en el Congreso, en enero de 1935, del proyecto de la ley de Seguridad Nacional, votado a aprobado dos meses después.

En este mismo año, el gobierno cerró la ANL, que en respuesta radicalizó todavía más su discurso, alejando del movimiento parte de su base política. Esto inició un periodo de gran tensión, en el cual el Estado actuó reprimiendo en forma violenta a la clase trabajadora, su primer blanco. Posteriormente, la represión se ejerce también sobre periodistas, intelectuales y, finalmente, parlamentarios.

Envueltos en este creciente proceso de radicalización se encontraban diversos tenientes que, en la medida que habían adherido al AIB o a la ANL, dejaban definitivamente de comprometerse en la defensa de un movimiento único que reuniese las diferentes tendencias ideológicas que, en momentos anteriores, les habían parecido compatibles.

Todavía en el año 1935, el Partido Comunista, en nombre de la ANL, desencadena una revuelta consistente en el levantamiento de unidades militares en los estados de Pernambuco, Río Grande do Norte y Río de Janeiro. En Río Grande do Norte el movimiento ocupa la ciudad de Natal por cuatro días, y en Río de Janeiro fracasa la tentativa de asalto al tercer Regimiento de Infantería y a la Escuela de Aviación de Campos dos Afonsos.

EL ESTADO NUEVO

El gobierno utiliza doblemente el fracaso de la ANL: amplía el ejercicio de la represión y, en el intento de preservarse institucionalmente, consiguió que el Congreso apruebe una serie de medidas excepcionales. Tales

medidas incluyen la creación de una Comisión Nacional de Represión al Comunismo, el Estado de Guerra, la "Declaración de Ideología" para los funcionarios públicos y para la burocracia sindical, el Tribunal de Seguridad Nacional y, paradójicamente, la propia quiebra de las inmunidades parlamentarias.

Es importante señalar que Vargas consigue tomar estas iniciativas sin pagar el impuesto del aislamiento político. Para garantizar su estabilidad, al mismo tiempo que procura identificar los actos de su gobierno con la orientación pregonada por el grupo militar favorable a un endurecimiento político, no dejaba de cultivar el apoyo de sectores importantes de la élite política, principalmente en los estados de Minas Gerais, Bahía y Pernambuco.

Las vinculaciones políticas realizadas en torno de las elecciones presidenciales previstas para 1938 señalaron el último intento de mantenimiento del régimen representativo. La sociedad política era reactivada por el clima de campaña electoral que favorecía la negociación de medidas atenuantes, tales como el fin del Estado de Guerra.

Una vez más las disputas políticas implicaba la confrontación tenientes versus oligarquías que ahora se producía en una coyuntura donde el movimiento integralista y el propio ejército ejercían presión. La presencia militar debilitaba el poder de las élites civiles y volvía inviable el mantenimiento del libre juego democrático. Vargas actuaba en el sentido de desalentar las candidaturas presidenciales, al mismo tiempo que ganaba paso a paso, el apoyo de los militares para su permanencia en el poder. Tales vinculaciones dificultaban los esfuerzos de los candidatos civiles, plenamente conscientes de la importancia de obtener el aval de los sectores militares para sus orientaciones.

Con vistas a intensificar la ola de anticomunismo se montan provocaciones políticas, y, como toque final de este proceso, se presenta a la opinión pública, en forma sensacionalista, un plan de acción comunista -el plan Cohen- que había sido forjado por el Ejército con el auxilio de los integralistas. Ese clima de tensión aseguraba a Vargas la coerción militar-civil necesaria para los arreglos finales del golpe que planeaba. Se encaminaba el pedido de Estado de Guerra al Congreso, se cerraban las cortinas de la campaña electoral, se iniciaba una nueva escalada de represión y se decretaba el fin del régimen constitucional de 1934.

Además de asegurarse el apoyo militar que precisaba, Vargas contaba con la total desarticulación de las élites civiles, absolutamente incapaces de contraponerse a la trama golpista. La debilidad de las fuerzas políticas se sumaba a la dificultad de unirse en el lanzamiento de una propuesta pluralista y abarcadora. En ese momento, Vargas también sumaba la connivencia de los integralistas, que solo más tarde, en 1938, se opusieron al Estado Nuevo, en un intento fracasado de invasión al Palacio de Gobierno.

El golpe del 10 de noviembre de 1937 trajo consigo una nueva carta constitucional, que define las atribuciones del estado, su naturaleza y su relación con la sociedad. Se suprimen los partidos políticos, se centralizan las decisiones económicas y se vuelve absoluto el poder del jefe de la nación. El estado como entidad suprema se identifica con la propia nación, expresando en su estructura organizativa la autoridad incontrastable de su jefe. La Carta del 37 imponía principios centralizadores, integracionistas, jerarquizantes y difusamente nacionalistas a todas las esferas de actividad de la sociedad brasileña. Por esta constitución, Brasil pasaba a insertarse formalmente en el papel de las dictaduras de estilo fascista, presentando su propia versión de organización política y autoritaria.

Vargas, además de transformarse en una pieza fundamental de ese juego, consiguió imprimirle la esencia personalista de su acción centralizadora. El peso de la personalidad de Getulio no impide, empero, que se construya una estructura sólida y autónoma de un aparato estatal que vuelve más compleja sus funciones, amplía su burocracia y garantiza la continuidad y el aumento de sus atribuciones.

Este proceso modernizante se refleja en la organización interna del Estado, en la política social, económicas y de relaciones exteriores.

LA POLÍTICA ADMINISTRATIVA

Con el Estado Nuevo se consolida una nueva estructura político-administrativa que tiende a garantizar el poder de decisión de un gobierno centralizado y autoritario. La presencia del Estado se hace sentir en todas las instancias, efectivizándose en términos concretos a través de la creación de un diversificado aparato técnico-burocrático. Se crea el Departamento Administrativo del Servicio Público (DASP), con la función de unificar las variadas agencias burocráticas que se reproducen del nivel federal hacia el estadual. La nueva máquina estatal cumplía el papel de viabilizar un modelo político jerarquizado, otorgando ahora una configuración administrativa, y no tan solo política, al campo de las relaciones entre las oligarquías, las intervenciones y la presidencia.

Era atribución del DASP centralizar las actividades de todo el servicio público del país, preparar el presupuesto anual y controlar su ejecución. La actuación de este organismo se compara con la de un superministerio, que extendía sus tentáculos regionalmente a través de departamentos estaduais y tenía una participación activa junto a las intervenciones y gobiernos locales.

También en el marco del intento de modernizar el aparato estatal se estructura el Departamento Federal de Seguridad Pública, responsable del orden social en todos sus aspectos (transito, costumbres, actividad política, etcétera.), al igual que el Departamento de Prensa y Propaganda (DIP), encargado de difundir la imagen oficial del Estado nuevo y de controlar y crear mecanismos de censura sobre los medios de comunicación y manifestaciones artísticas de todo orden. En el intento de popularizar el aspecto personalista de la acción social de Vargas, las actividades propagandísticas se destinaban fundamentalmente a la masa trabajadora

LA CUESTIÓN SOCIAL

Desde los primeros momentos del Gobierno Provisional Vargas se preocupó por el desarrollo de una política social. Ya al mes siguiente de la Revolución de 1930 se creaba el Ministerio de los Asuntos de Trabajo, Industria y Comercio, promoviendo la acción directa del Estado en el ámbito laboral a través de la regulación de la jornada de ocho horas, del trabajo femenino y del menor, del derecho a los francos y a la sindicalización. En el periodo 1930-34, el Estado pasó a ejercer la tutela de la clase obrera, intentando su encuadramiento de forma relativamente pacífica.

La convivencia de trabajador con la nueva estructura burocrática, que establecía canales directos entre la actividad sindical y el gobierno federal, era un hecho nuevo. En un primer momento, tal hecho parecía más fácilmente absorbible por obreros de baja calificación, de regiones de menor concentración industrial, donde las señales de un movimiento político organizado no eran tan fuertes. Ahora se exigía la ciudadanía brasileña al trabajador sindicalizado, intentando apartar del movimiento antiguos liderazgos extranjeros. Por otro lado, se establecía que los delegados ministeriales tenían derecho a asistir a las asambleas obreras y la obligación de examinar la contabilidad de los sindicatos. Todavía se intentaba implantar el sistema de sindicato único, que la Constitución del 34 rechazaría.

A partir de 1934, la postura tutelar del estado se sumaba a la explicitación ideológica de sus actitudes. La capacidad de movilización de la ANL en el medio obrero agudizaba el contenido anticomunista presente en las palabras que Vargas y sus ministros dirigían a los trabajadores. El endurecimiento del discurso se hacía acompañar de una creciente acción represiva sobre todos los focos de resistencia al encuadramiento oficial, lo que acarrearía la completa despolitización del movimiento obrero.

La liquidación del orden liberal en 1937 reforzó, a través de la nueva Constitución, el sentido corporativista de la relación trilateral entre el Estado, la clase obrera y la burguesía. A continuación, siguió la reglamentación de la Justicia del Trabajo, la promulgación de la ley sindical, la creación del impuesto sindical y el establecimiento del salario mínimo. En poco tiempo más se iría acumulando jurisprudencia sobre cuestiones laborales, cuyas determinaciones fueron unificadas en un código que, a partir de 1943, adquirió organicidad en la Consolidación de las Leyes de Trabajo.

LA ECONOMÍA

Con relación a la esfera económica, el gobierno de Vargas es responsable de la introducción de prácticas que alterarían en forma sustancial la mecánica del proceso de toma de decisiones, que deja de ser atributo exclusivo de las clases productoras. A partir de la década del 30, la intervención del estado se vuelve constante en la economía brasileña. Tal intervención es favorecida por la propia coyuntura de crisis, de extensión nacional e internacional, que al afectar la agricultura de exportación alcanza simultáneamente la base económica de los gobiernos estatales.

Las primeras iniciativas de Vargas tendían a crear organismos estatales con la atribución de dirigir y responsabilizarse por la producción y comercialización de los productos agrícolas más importantes. Se organizan el Consejo Nacional del Café (1931) y el Instituto del Azúcar y del Alcohol (1933); ambos con la finalidad de garantizar en forma permanente una asistencia en términos de financiamiento, regulación de precios y de mercado. La preocupación por recuperar y expandir racionalmente la agricultura no significa, sin embargo, que el sector primario tenga peso absoluto en la política económica del gobierno de Vargas.

En la década del 30 se inicia una transformación profunda del parque industrial brasileño, que trae consigo una composición más diversificada de la burguesía. En este sector la acción del estado se caracteriza por concretar esfuerzos e iniciativas que favorecen la industrialización, al mismo tiempo que aseguran la participación directa del Estado en este proceso. El proyecto adoptado vuelve imprescindible la presencia del Estado en la dinámica de la expansión industrial, en la medida en que este asume directamente el desarrollo de una moderna industria de transformación y la exploración de recursos minerales (petróleo, carbón, siderurgia, energía eléctrica), y al mismo tiempo se responsabiliza en llevar en la práctica un plan económico donde se destaca la defensa de la industria nacional. En este periodo, el sector secundario atraviesa una inmensa diversificación de su estructura productiva, que profundiza aun más la concentración de la actividad económica en la región centro-sur del país.

La participación del Estado en la actividad económica también implica la búsqueda de un patrón óptimo de relación con las clases productoras. En este sentido, Vargas crea mecanismos de aproximación con el empresariado a través de una política de crédito y de la estructuración de organismos técnicos dentro del aparato estatal, capaces de permitir la representación de los intereses de las clases productoras. Esta innovación, además de diversificar las actividades de la burocracia federal, garantizaba a los industriales un canal de comunicación con el gobierno bastante eficiente para ejercer presiones y explicitar demandas. Finalmente, reforzaba el carácter autoritario de la relación estado-sociedad, en la medida que desalojaba la funcionalidad de los canales representativos clásicos de un orden liberal burgués.

La presencia del estado en la economía aumenta todavía más a partir de 1942, cuando Brasil rompe con los países del Eje. Se amplían los brazos de la tecnoburocracia para que sean sistematizados el control y la dirección de la actividad económica nacional. En septiembre del mismo año es creada la Comisión de Defensa de la Economía Nacional, que comienza a monopolizar las tareas de planificación de la producción agrícola, industrial y minera, tanto como las de distribución y comercialización de sus productos en el país y en el exterior. Esta Comisión hace cumplir su autoridad valiéndose del Tribunal de Seguridad Nacional.

LA POLÍTICA EXTERNA

Las consecuencias internas del conflicto mundial se volvieron evidentes no solo en función de la posición estratégica del Brasil en el cuadro de las relaciones interamericanas. En el comienzo de la década del 30, época de los esfuerzos de recuperación de la crisis internacional, se comprueba que el gobierno de Vargas va adoptando una postura más bien independiente en la conducción de su política externa comparativamente al periodo de la República Vieja.

La reactivación del comercio exterior brasilero se inserta en el contexto de la intransigente disputa entre los Estados Unidos y Alemania por los mercados latinoamericanos. La diferenciación entre libre comercio y comercio compensatorio, explicitada en las propuestas comerciales de esas grandes potencias, se traducía en Brasil en divergencias entre grupos de interés, partidos políticos y aun organizaciones estatales.

Con el agravamiento de la situación europea, las discrepancias en cuanto a la política económica externa pasan a estar, naturalmente, relacionadas con una cuestión más profunda: la del alineamiento internacional. La inexistencia de una posición hegemónica por parte de cualquiera de los grupos internos permitió, por lo menos en un periodo, que Vargas se lanzase al escenario internacional con un juego de equidistancia pragmática, neutralizando conflictos internos sin sellar compromisos definitivos. La política externa brasilera se caracterizaba así por una oscilación entre los intereses de los Estados Unidos y de Alemania, intentando privilegiar la atención de las necesidades prioritarias del país.

El grupo militar representa el sector más influyente en el conjunto de fuerzas que participan en el proceso de toma de decisiones de la política externa brasilera en este periodo. Esto se explica internamente por la presencia militar en la estructura de poder montada a partir de 1937; externamente, por la importancia creciente del factor militar-estratégico en el cuadro de las relaciones internacionales. En este sentido, las negociaciones militares pasan a tener peso decisivo en las relaciones bilaterales del Brasil. Las necesidades inmediatas provocadas por el ingreso de los Estados Unidos en la guerra repercuten en el continente americano solo bajo la forma de presiones aceleradas por definir el alineamiento. A medida que reafirman el panamericanismo y a través de diversas conferencias realizadas en América Latina, los Estados Unidos ampliaban, paso a paso, las bases continentales de la hegemonía que buscaban en el plano internacional. El momento decisivo de este proceso fue la Reunión de Cancilleres de Río de Janeiro, en 1942.

La actitud de Brasil estaba fuertemente condicionada al éxito de las negociaciones para el financiamiento de su industria siderúrgica y la obtención de los suministros bélicos necesarios para su reequipamiento militar. La garantía de que estas demandas serían satisfechas por los norteamericanos era vital para que Vargas articulase el apoyo interno necesario para el alineamiento junto a los Estados Unidos. Mientras tanto, tal alineamiento no podría trastornar la imagen nacionalista de su gobierno, ni ser responsable por el desencadenamiento de una crisis militar interna. La fórmula encontrada por Vargas fue la de conseguir financiamiento estadounidense para la instalación de un parque siderúrgico, con control estatal, al mismo tiempo que neutralizaba oposiciones militares garantizando que los Estados Unidos enviarían el material bélico que las fuerzas armadas brasileras venían solicitando.

Por fin, se firmaron entre los dos países acuerdos para promover la cooperación económica y técnica bilateral, volviéndose Brasil beneficiario de los acuerdos *lend-lease*¹, y al mismo tiempo comprometiéndose a garantizar el suministro exclusivo de caucho y otras materias primas brasileras a los Estados Unidos y la utilización de bases en el nordeste brasilero por contingentes militares norteamericanos. A partir de este momento, el gobierno de

¹ Programa de asistencia militar de los Estados Unidos durante el periodo de guerra.

Vargas pasa a representar un punto de apoyo considerable a los esfuerzos de los Estados Unidos tendientes a eliminar la influencia del Eje en América Latina.

LA CAÍDA DE VARGAS

Además de representar un viraje en la política externa brasilera, el rompimiento con el Eje ocasiono una asociación creciente entre la coyuntura externa y la interna. La vinculación entre este rompimiento y el fin de la vigencia de la Carta de 1937 aparece nítidamente en las propias declaraciones de Vargas, quien relaciona la instalación de un régimen democrático con el fin del conflicto bélico mundial. En 1943, las primeras señales de victoria de las fuerzas aliadas coinciden con la aparición de manifestaciones más contundentes de la oposición política del Estado Nuevo. La contradicción democrática versus fascismo, que caracteriza el conflicto político que el sistema capitalista vive en el plano mundial tiene resonancia creciente en el cuadro brasilero.

Renacen los frentes únicos, articulados por grupos opositores (liberales, comunistas y grupos oligárquicos) que actúan a través de entidades tales como la Unión Nacional de los Estudiantes, la Sociedad de los Amigos de América y la Liga de Defensa Nacional. La defensa del ingreso del Brasil en la guerra, bandera que la oposición empuñaba vigorosamente, facilita un trabajo de movilización popular difícilmente reprimible. El medio estudiantil, principalmente el del área de derecho, desempeña un papel bastante importante, consiguiendo politizar poco a poco, a través de la Unión Nacional de Estudiantes, la vida universitaria. Las manifestaciones a favor de los aliados alcanzan los tentáculos autoritarios del régimen, en la medida en que se asoman los propios disensos internos, provocados por divergencias en cuanto a la conducción de la política externa a partir de 1942.

La constitución de la Fuerza Expedicionaria Brasilera (FEB) y su envío a Europa trajo como resultado la aproximación entre sectores militares y las fuerzas opositoras liberales. Por otro lado, el creciente interés norteamericano en el restablecimiento de relaciones del Brasil con la URSS crea algunas limitaciones al discurso anticomunista que resonara durante todo el Estado Nuevo. El desgaste político de Vargas aumenta en la medida en que antiguos correligionarios -como Oswaldo Aranha y Goés Monteiro- se alejan de su gobierno, fortaleciendo todavía más los grupos opositores movilizados en la lucha contra la dictadura.

El proceso de redemocratización se da en varias etapas, estimulado por la unificación de sectores políticos opositores, que se expresan en manifiestos, congresos y entrevistas, desafiando los límites colocados por la censura y el cercenamiento de la vida política impuesta por el Estado Nuevo.

En febrero de 1945, Vargas cede y decreta el Acta Adicional número 9, que prevé elecciones directas para presidente, gobernadores, parlamentarios. Fuerzas políticas de oposición y del oficialismo se preparan para el enfrentamiento electoral, organizando partidos y escogiendo candidatos. Se intensifican los esfuerzos para crear la Unión Democrática Nacional (UDN) como el gran partido de oposición al Estado Nuevo. Por otra parte, se organiza el Partido Social Demócrata (PSD) reuniendo jefes políticos regionales, principalmente interventores, que aprovechan la maquinaria del Estado Nuevo y los fuertes lazos con liderazgos locales. También se forma el Partido Trabalhista Brasilero (PTB) articulado por asesores de Vargas, principalmente del Ministerio de Trabajo, que pretendían la creación de un partido de masas a partir del acceso institucionalizado a los sindicatos y al movimiento obrero.

La victoria de la lucha por la amnistía, en abril de 1945, permitió el retorno y la liberación de líderes comunistas que inmediatamente buscaron ocupar el espacio político que se abría para ellos. La presencia de la URSS entre los aliados favorece enormemente la lucha por la legalización del Partido Comunista Brasilero, que sus militantes emprenden. En mayo se establecen por ley nuevas reglas electorales, entre las cuales se destacan el voto secreto obligatorio y las exigencias para el registro de partidos nacionales.

En su mayoría, los opositores no privilegiaban un trabajo de movilización auténticamente popular. Los más importantes de los nuevos partidos, como la Unión Democrática Nacional (UDN) y el Partido Social Demócrata (PSD), poseían un discurso dirigido primordialmente hacia los sectores de élite y hacia las clases medias urbanas. En tanto, el intenso proceso de industrialización que caracterizara los últimos años de la economía brasilera hizo surgir una masa de trabajadores que, por primera vez, tomaba contacto directo con la dinámica de una vida política democrática. La identificación de esta clase obrera con la política social de Getulio no era despreciable y no sería difícil para él acrecentar la lista de beneficios otorgados a los trabajadores y lograr su politización. El proceso de redemocratización ampliaba el espacio para oposiciones, huelgas y movimientos reivindicatorios, que en este momento no se asociaban a ninguna organización político-partidaria.

Por su lado, el Partido Comunista incorporaba a su esfuerzo de reorganización una propuesta de aproximación política de Vargas. Desde el punto de vista programático, los comunistas sustentan esta alianza basados en su resolución de dar apoyo a Vargas en la defensa de una Asamblea Constituyente. Esta opción viene a reforzar el movimiento *queremista*, iniciado en agosto de 1945. Las inmensas manifestaciones populares a favor de la continuidad de Vargas evidenciaban la fuerza del movimiento, que en dos meses se extiende por todo el país. El movimiento "queremos Getulio" indisponde todavía más los ánimos opositores, que movilizan fuerzas políticas

civiles y militares en la búsqueda de una solución inmediata. La incertidumbre en cuanto a las intenciones de Vargas de dar continuidad al proceso de redemocratización se agravan, provocando declaraciones aprehensivas por parte de los representantes del gobierno norteamericano. Por otro lado, el movimiento *queremista* propalaba los orígenes del populismo en Brasil, abriendo el camino para el éxito político del *Partido Trabalhista Brasileiro*.

A fin de octubre, los militares llegan a un entendimiento en cuanto a la necesidad de anticipar el fin del Estado Nuevo. Ante las presiones Vargas renuncia, cerrando el primer ciclo contemporáneo de dictadura en la historia contemporánea de Brasil.

La actuación de Vargas en el periodo 1930-45 trajo profundas transformaciones que todavía hoy se expresan en la vida cotidiana de la sociedad brasilera. A partir de la década del 30, el Estado amplió y diversificó sus atribuciones. Este proceso adquirió una dinámica coercitiva, haciéndose factible solo en la medida en que reprime y excluye la libre representación de los intereses de la sociedad civil. A pesar de haber surgido fuerte y centralizador, el Estado que se estructura se presenta como un fenómeno problemático en la vida política brasilera. Su inmensa dificultad de convivir con el libre juego democrático lo vuelve extremadamente vulnerable a movimientos golpistas y multiplica los esfuerzos necesarios para el fortalecimiento de los procesos de apertura.

La marca que Getulio Vargas imprimió a la historia contemporánea brasilera no se define solo por el carácter personalista de su gobierno, sino también por su capacidad de incorporar trazos políticos personales al proceso de estructuración del Estado Nacional. La dictadura de Vargas se afirma en el mito y en la realidad.